

## ***PRÓRROGA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO DE UN SERVICIO DE SOPORTE Y CONSULTORÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD Y LOPD-GDD) Y EXTERNALIZACIÓN DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO), POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.***

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

**Expediente de Contratación:** PA 04/20

### **Antecedentes de Hecho**

**Primero:** Que el contrato vigente para la prestación de contrato de un servicio de soporte y consultoría en materia de protección de datos (rgpd y lopd-gdd) y externalización del delegado de protección de datos (dpo), por procedimiento abierto con pluralidad de criterios no sujeto a regulación armonizada., finaliza su vigencia el próximo 30 de marzo de 2026

**Segundo:** Que, en estricto cumplimiento del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), este órgano de contratación actuó con la máxima diligencia publicando el anuncio de licitación del nuevo expediente PA 18-25 en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26 de diciembre de 2025 a las 08:15 horas. Esta actuación garantizó una antelación superior a los tres meses exigidos por la normativa respecto a la fecha de finalización del contrato en vigor, demostrando la previsión y correcta planificación.

**Tercero:** Que, a pesar de la diligencia mostrada en el inicio del expediente, se han producido una serie de incidencias y dilaciones durante la tramitación del procedimiento de adjudicación que resultaban totalmente imprevisibles en el momento de la licitación y que, en ningún caso, son imputables a la falta de previsión o actuación de este órgano de contratación. Concretamente, el retraso se fundamenta en los siguientes hechos sobrevenidos y de obligado cumplimiento garantista:

- **Revisión del Sobre 1 (Documentación administrativa):** Detección de deficiencias subsanables en la documentación presentada por los licitadores, lo que obligó a cursar los preceptivos requerimientos de subsanación y agotar los plazos legales para la recepción, corrección y validación de las respuestas de los interesados.
- **Análisis del Sobre 2 (Criterios sujetos a juicio de valor):** La naturaleza cualitativa de los criterios exigió una valoración detallada de los mismos. Durante esta fase, la Comisión de Evaluación se vio en la necesidad de solicitar aclaraciones específicas a uno de los licitadores para precisar determinados aspectos de su oferta técnica. Este trámite generó una dilatación temporal imprevisible, estrictamente necesaria para el análisis riguroso de la aclaración y la posterior emisión del informe técnico de valoración.
- **Valoración del Sobre 3 (Criterios evaluables mediante fórmula):** Identificación de una posible oferta anormalmente baja por parte de uno de los licitadores conforme a

los parámetros del pliego. Esto forzó la activación del procedimiento contradictorio legalmente establecido, requiriendo al licitador la justificación de la viabilidad de su oferta y procediendo a su exhaustivo estudio técnico antes de poder continuar con la tramitación.

- **Suspensión legal por recurso:** La obligatoriedad ineludible de respetar el plazo legal de 15 días hábiles para la interposición de recurso especial en materia de contratación tras la propuesta de adjudicación, período durante el cual el procedimiento de formalización del contrato queda preceptivamente en suspenso.

#### **Cuarto: Necesidad de prórroga del servicio de Delegado de Protección de Datos y consecuencias de su interrupción**

Que, tratándose de una Fundación de Investigación Biomédica, la continuidad del servicio de Delegado de Protección de Datos (DPD) resulta absolutamente esencial, no solo desde una perspectiva organizativa, sino como una obligación legal imperativa derivada del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que exigen la designación y mantenimiento efectivo de esta figura en entidades que tratan datos personales a gran escala y, especialmente, categorías especiales de datos como los relativos a la salud.

La eventual interrupción del servicio de DPD supondría, en primer lugar, un incumplimiento directo de la normativa vigente, al dejar a la Fundación sin la figura encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos, asesorar a la entidad y actuar como punto de contacto con la autoridad de control. Este incumplimiento no es meramente formal, sino que conlleva un riesgo cierto de imposición de sanciones administrativas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, que en el ámbito del sector público pueden traducirse en apercibimientos, medidas correctivas y un grave impacto reputacional.

En segundo lugar, la ausencia de DPD comprometería de forma directa la seguridad jurídica de todos los tratamientos de datos personales llevados a cabo por la Fundación, incluyendo aquellos vinculados a proyectos de investigación biomédica, ensayos clínicos y gestión de historiales o muestras biológicas. Sin el debido asesoramiento especializado, se incrementa exponencialmente el riesgo de tratamientos ilícitos, brechas de seguridad o incumplimientos de los principios de licitud, minimización y confidencialidad, lo que podría derivar en la paralización de proyectos de investigación en curso, la pérdida de financiación pública o privada, y la imposibilidad de participar en convocatorias competitivas que exigen un cumplimiento riguroso en materia de protección de datos.

Asimismo, la falta de este servicio impediría la correcta gestión de los derechos de los interesados, generando una situación de indefensión para los titulares de los datos y exponiendo a la entidad a reclamaciones y conflictos legales. Igualmente, se vería afectada la obligación de realizar evaluaciones de impacto en protección de datos (EIPD), especialmente relevantes en el ámbito biomédico, así como la adecuada gestión y notificación de posibles violaciones de seguridad de los datos personales en los plazos legalmente establecidos.

En consecuencia, la interrupción, aunque fuera temporal, del servicio de Delegado de Protección de Datos generaría un perjuicio grave, inmediato y de difícil reparación para el interés público, afectando tanto al cumplimiento normativo como al desarrollo ordinario de la actividad investigadora de la Fundación. Por todo ello, resulta imprescindible garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio mediante la prórroga excepcional del contrato vigente, en tanto se culmina la tramitación del nuevo expediente de contratación.

**Quinto:** Que la suma de estos trámites, orientados a salvaguardar la legalidad, transparencia y concurrencia del procedimiento, hace materialmente imposible la formalización del nuevo contrato antes del vencimiento del actual. La paralización del servicio generaría graves e irreparables perjuicios para el normal funcionamiento de esta Fundación y la consecución de sus fines institucionales, haciendo estrictamente necesaria y justificada la aplicación de la prórroga excepcional regulada en el artículo 29.4 de la LCSP.

## Fundamentos de Derecho

**Primero:** El artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que habilita al órgano de contratación para acordar la prórroga del contrato vigente por el tiempo indispensable para asegurar la continuidad de la prestación hasta la formalización del nuevo, siempre que concurren las circunstancias previstas en dicho artículo.

**Segundo:** Que, como ha quedado acreditado en los antecedentes, concurren todos los requisitos exigidos por la ley: el anuncio de la nueva licitación se publicó con la antelación debida, el retraso se debe a causas imprevisibles inherentes al procedimiento, y existen evidentes razones de interés público para evitar la interrupción del servicio, que causarían graves perjuicios a la actividad de esta entidad.

**Tercero:** La competencia de este Órgano de Contratación para adoptar la presente resolución.

## ACUERDO

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Contratación, en uso de las facultades que le son conferidas, ACUERDA:

**PRIMERO:** Aprobar la prórroga del contrato de la licitación PA 04/20 servicio de soporte y consultoría en materia de protección de datos (rgpd y lopl-gdd) y externalización del delegado de protección de datos (dpo), por procedimiento abierto con pluralidad de criterios no sujeto a regulación armonizada, suscrito con la entidad contratista actual, desde el día siguiente a la finalización del contrato vigente y por el tiempo estrictamente indispensable hasta que se formalice y dé comienzo la ejecución del nuevo contrato, no pudiendo exceder esta prórroga, en ningún caso, el límite máximo de nueve meses.

**SEGUNDO:** Dar traslado de la presente Resolución al contratista para su conocimiento y efectos.

**TERCERO:** Autorizar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente.

**El órgano de contratación**

D<sup>a</sup> Patricia Rodríguez Lega

Directora

D. César A. Gómez Derch

Presidente